



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONFLICTO DE TRABAJO 5/2002.
SUSCITADO ENTRE [REDACTED]
[REDACTED] Y LA DIRECTORA
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
diecinueve de octubre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:



CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION
ACUERDO

PRIMERO. [REDACTED], en escrito
presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dos, ante la
mesa de control de correspondencia de la Comisión
Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación,
mandó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
cumplimiento y pago de las siguientes:

"PRESTACIONES.

- a) *La reinstalación en la plaza de la cual fui injustificadamente separada.*
- b) *El pago de los salarios caídos.*
- c) *La devolución del fondo de ahorro capitalizable.*
- d) *La devolución del fondo de pensiones.*
- e) *El pago de aguinaldo proporcional al año 2002.*
- f) *El pago de vacaciones y prima vacacional.*
- g) *El pago de las prestaciones percibidas en forma proporcional bajo las claves 01, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33 y 35 en el período comprendido del 16 al 27 de mayo del año 2002.*

h) El pago de tiempo extraordinario.

Fundo la presente demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

HECHOS:

1.- Mi nombre es [REDACTED], soy [REDACTED], nací en [REDACTED] el [REDACTED], sin ninguna instrucción escolar, no sé leer ni escribir y desde el 6 de junio de 1995, comencé a prestar mis servicios como Empleada Doméstica para los CC. CARLOS DE SILVA NAVA Y ADRIANA MAGALLANES MEDINA, en su domicilio particular, ubicado en las calles de [REDACTED], número [REDACTED] Colonia [REDACTED] Delegación [REDACTED] de esta Ciudad, laborando de las 06:30 a las 22:00 horas de lunes a domingo de cada semana, disfrutando de alimentos y habitación en dicho domicilio.

Por gestiones del C. Carlos de Silva Nava ingresé a laborar al Poder Judicial de la Federación – Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el nombramiento de Ayudante de Servicios de Oficina SPS, adscrita al propio Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava a partir del 1º de junio del año de 1996, percibiendo como retribución a últimas fechas las siguientes percepciones y deducciones, bajo las siguientes claves e importes:

CLAVE/PERCEPCIONES

IMPORTE

01 SUELDO COMPACTADO

\$2,171.49

12 COMP. AD. MAYOR 5 AÑOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

\$700.00

18 AYUDA DE RENTA

\$8.00

22 AYUDA PARA ALIMENTACIÓN

\$290.00

24 AYUDA DE PASAJES

\$290.00

25 DESPENSA

\$38.35

26 PREV. SOCIAL MÚLTIPLE

\$47.79

27 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

(QUINQUENIO)

\$23.00

29 AYUDA DE SERVICIOS BÁSICOS

\$40.12

33 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

\$100.00

35 COMPENSACIÓN DE APOYO

\$520.84

CLAVE/DEDUCCIONES

IMPORTE

51 I.S.P.T.

\$ [REDACTED]

52 FONDO DE PENSIONES

\$ [REDACTED]

53 SERVICIO MÉDICO

\$ [REDACTED]

54 SEG. COLECT. RETIRO

\$ [REDACTED]

71 FONDO DE AHORRO



TE DE
ACION
DE ACUERDO

CORTES DE
LA NACION
DE ACUERDO

CAPITALIZABLE

\$ [REDACTED]

95 SEG. APORT. ADICIONAL

\$ [REDACTED]

Es preciso mencionar, que como consta en mi hoja de filiación ante el Poder Judicial Federal el domicilio que señalé en mis generales como propio, fue el del propio Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava, por instrucciones de éste, lo cual corrobora lo manifestado en primer término, es decir, que desde el 6 de junio de 1995 he sido empleada doméstica de los señores Carlos de Silva Nava y Adriana Magallanes Medina, en su domicilio particular ubicado en [REDACTED] numero [REDACTED], colonia [REDACTED], Delegación [REDACTED] de esta Ciudad y solamente me consiguió trabajo en la Suprema Corte de Justicia para que me pagaran un sueldo, pues a pesar de que trabajaba para el Poder Judicial Federal – Suprema Corte de Justicia de la Nación-, jamás me presenté ante dicho órgano a trabajar, sólo iba a cobrar mi sueldo y las condiciones de trabajo siempre fueron las mismas, o sea empleada doméstica, desempeñando el horario de labores ya señalado.

Por otro lado, es pertinente señalar que en el mes de mayo del año 2000, sin recordar el día, ni la hora, le manifesté al Ministro Carlos de Silva Nava y a su esposa Adriana Magallanes Medina, el porqué trabajaba tanto tiempo sin que me fuera cubierto tiempo extra alguno y que además me

FUP
JUSTIA
SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

había enterado un día en que fui a cobrar, que el horario de labores que debía cubrir de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia era de ocho horas diarias, trabajar cinco días y descansar dos días, a lo que el Ministro Carlos de Silva Nava me contestó que eso no era posible ya que si quería mi horario de la Suprema Corte, tendría que trabajar en las oficinas y no en su casa, y se darían cuenta de que no se leer ni escribir y me quitarían mi sueldo y prestaciones, a lo que yo le manifesté que eso lo arreglaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En virtud de lo anterior, el Ministro Carlos de Silva Nava y su esposa Adriana Magallanes Medina acordaron con la suscrita que a partir del mes de junio del año 2000, me darían \$ [REDACTED] semanales, por cubrirles un horario de las 17:01 a las 22:00 horas de lunes a sábado y los domingos de las 06:30 a las 16:00 horas, disfrutando de alimentos y habitación, firmando con ellos cada año un contrato individual de trabajo y recibos de pago semanalmente.

2.- Con fecha 28 de mayo del año 2002, siendo aproximadamente las 10:00 horas me encontraba laborando como de costumbre en la casa de los señores Carlos de Silva Nava y su esposa Adriana Magallanes Medina, precisamente haciendo el aseo de la banqueta que da al acceso de la puerta de entrada y salida, cuando salió el Ministro Carlos de Silva Nava y me manifestó "[REDACTED] ya no vas a entrar, porque estas despedida", sin mediar explicación alguna, situación que fue presenciada

por diversas personas que se encontraban en ese momento.

En virtud de lo anterior, es por lo que solicito se me reinstale en la plaza que venía ocupando como Ayudante de Servicios de Oficina SPS. Al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no existe ni existió motivo suficiente para que haya sido despedida de mi empleo.

Ahora bien, por otro lado, del nombramiento asignado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se desprende que se contengan los requisitos a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como son:

- I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;*
- II.- Los servicios que deban prestarse, que se determinarán con la mayor precisión posible;*
- III.- El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada;*
- IV.- La duración de la jornada de trabajo;*
- V.- Sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y;*
- VI.- El lugar en que se prestará sus servicios.*

De lo anterior se colige, que al no adecuarse mi nombramiento a ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no puede ni debe considerárseme como trabajador de confianza, pues mi nombramiento y plaza no se adecua a ninguno de los supuestos que refiere





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONFLICTO DE TRABAJO 5/2002-C.

FORMA A-53

dicho numeral, por tanto, solicitó se me reinstale en la plaza asignada, ya que de no ser así, se entendería que quizás el Ministro Carlos de Silva Nava como la persona que gestionó mi asignación, se aprovecharon del hecho, de que no se leer ni escribir, para así causarme un perjuicio laboral, al desempeñar durante muchos años una jornada de trabajo inhumana y contraria a lo realmente estipulado en la ley, y asignado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.- Por esta vía, solicito la devolución y pago del FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (clave 71), que en forma quincenal se me deducía de mi salario, deducción que data desde el 15 de febrero de 1998 (primera deducción) y que se me ha realizado en forma quincenal por diversas cantidades y que asciende a la cantidad de

\$ [REDACTED]

[REDACTED] PESOS [REDACTED] M.N.), más los intereses que se hayan generado.

De la misma manera se reclama la devolución y pago del FONDO DE PENSIONES (clave 52), que también en forma quincenal se me deducía de mi salario, mediante diversas cantidades, deducción que data del 15 de junio de 1996, y que asciende a la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] PESOS [REDACTED] M.N.), más los intereses que se hayan generado.

Las referidas cantidades, resultan de la suma de todas y cada una de las cantidades que se me deducían de mi salario, salvo error u omisión de

carácter aritmético, las cuales se reclaman por esta vía y forma.

4.- En virtud de que desempeñaba una jornada de labores de las 06:30 a las 17:00 horas de lunes a viernes de cada semana, siendo que lo correcto era el desempeñar una jornada de ocho horas diarias, de las 09:00 a las 17:00 horas, es por lo que por esta vía se reclama el pago de dos horas y media extras diarias, por todo el período comprendido del mes de junio de 2000 hasta un día laborable antes del injustificado despido, mismas que van de las 14:30 a las 17:00 horas, comprendiendo un total de 12:30 horas extras semanales, a razón de \$ [REDACTED] semanales, por lo que se reclama la cantidad de \$ [REDACTED] salvo error u omisión de carácter aritmético.

5.- Por esta vía se reclama el pago de los salarios devengados comprendidos del 16 al 27 de mayo del año en curso. De la misma manera se reclama el pago de PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO, COMP. AD. COMP. AD. MENOR 5 AÑOS, AYUDA DE RENTA, AYUDA PARA ALIMENTACIÓN, AYUDA DE PASAJES, DESPENSA, PREV. SOCIAL MÚLTIPLE, PRIMA DE ANTIGÜEDAD (QUINQUENIO), AYUDA DE SERVICIOS BÁSICOS, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN Y COMPENSACIÓN DE APOYO, en su parte proporcional al año 2002".

SEGUNDO. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dos, el Tercer Integrante Presidente de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

de conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 6, 10, 11, 126, 127, 130, 131, 136, 152, 154, 158 y demás relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenó la formación del expediente respectivo, el que se registró con el número 5/2002-C; tuvo a [REDACTED]

formulando demanda laboral, únicamente en contra de la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser esa área la encargada de las cuestiones e incidencias relacionadas con la situación laboral de los trabajadores de ese Alto Tribunal, tuvo por señalado el domicilio que la actora indicó para oír y recibir notificaciones, por ofrecidas las pruebas que describió en su escrito de demanda, reservándose acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno, en términos del artículo 132 de la referida ley burocrática.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 127, 130 y 136 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenó emplazar y correr traslado a la demandada en este conflicto de trabajo, para que en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que le fuera notificado el acuerdo citado, diera contestación a la demanda laboral entablada en su contra, apercibida que de no hacerlo en el lapso que se le concedió, o resultar mal representada, se tendría por contestada la misma en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario; se requirió a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, se sirviera proporcionar el nombre y domicilio de la persona que ocupara la plaza reclamada por la actora, debiéndose informar también, de ocurrir, los movimientos que se susciten con posterioridad, ya que de conformidad con los artículos 689 y 690

de la Ley Federal del Trabajo, la resolución que se dicte en este asunto podría pararle perjuicio al que ocupe la plaza mencionada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil dos, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, la titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitó se le reconociera la personalidad con la que compareció y se tuviera por designados como sus apoderados y representantes legales a los licenciados Marco Antonio Bouchain Rodríguez y Joel Bosques Alarcón, en términos del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

CUARTO. Por proveído de esa misma fecha, el tercer integrante Presidente de la Comisión Substanciadora, le reconoció la personalidad y carácter con el que se apersonó a la titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que acreditó con el original de su nombramiento suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticuatro de noviembre de dos mil; además, con fundamento en los artículos 689 y 690 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, reconoció con el carácter de tercero interesado a [REDACTED] a quien se ordenó emplazar y correr traslado con la copia de la demanda entablada en su contra por [REDACTED] y se le concedió el plazo de tres días, contado a partir del hábil siguiente al en que fuera notificado dicho acuerdo, para que se apersonara a hacer valer los derechos que estimara pertinentes y ofreciera pruebas, apercibida que de no hacerlo quedaría sujeta al resultado de este conflicto de trabajo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

QUINTO. Los apoderados legales de la Directora General Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contestaron la demanda dentro del plazo legal, en los siguientes términos:

"El señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava, formó parte de la última Comisión de Gobierno y Administración instalada en sesión pública plenaria el tres de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por lo tanto, en ejercicio de las facultades que les otorga el artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, iniciaron la atención de los asuntos administrativos del Poder Judicial de la Federación. La referida Comisión a través del acta No. C.G.A. No. 1 de fecha 2 de enero de 1995, emitió en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Primero, Segundo y Sexto Transitorios de la reforma constitucional arriba citada, y con apoyo, además, en los artículos Séptimo y Noveno de la Ley que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución y acuerdo en que se determinan las pensiones que deben recibir los veinticinco Señores Ministros de este Alto Cuerpo Judicial, incluyendo al señor Ministro Carlos de Silva Nava, en la referida acta en el punto romano VII, se ordenó se proporcionara a todos los señores

INDOS
SUBSTAL
L. PODER JU
FEDERACION.

Ministros un cuaderno personalizado con la información básica, que incluyó entre otros rubros, el numeral IV. Personal de apoyo, que estableció: 'Los señores Ministros al obtener su jubilación tienen derecho a solicitar dos plazas de ayudante de servicios y una de chofer de SPS-36, para su servicio personal; las propuestas de nombramiento respectivas las hará el Ministro pensionado a la Comisión de Gobierno y Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe destacar que estas plazas son de confianza, en virtud de lo cual el Ministro retirado podrá remover libremente a sus ocupantes', criterio basado en lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que en su parte sustantiva establece: 'En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza,... el personal de apoyo... de los servidores públicos de nivel de director general o superior...', por lo tanto la demandante fue designada previa recomendación del señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava, para ocupar una plaza de confianza con efectos a partir del 1º de junio de 1996, hasta la fecha de su baja que fue el 15 de mayo de 2002, generada por aviso a este Supremo Tribunal del Ministro jubilado citado, por lo anterior no existió el supuesto despido que dice la actora se cometió en su persona.

Asimismo, procedemos a contestar en tiempo y forma la demanda planteada, sirviendo de





fundamento a la misma, los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

PRESTACIONES:

En relación con el objeto de la demanda interpuesta manifestamos que:

- a) *Carece de acción y derecho la actora para reclamar la reinstalación a que alude en su demanda como una de sus acciones principales, toda vez que es improcedente por el hecho de que la demandante fue una trabajadora de confianza al servicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se encuentra excluida de la aplicación de este ordenamiento legal. Asimismo, todos los derechos de la actora le fueron plenamente cubiertos en términos de la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 Constitucional.*
- b) *Es improcedente al mismo tiempo el pago de salarios caídos, en razón de que se trata de una reclamación accesoria de la principal (reinstalación), por lo que, si ésta es improcedente lo será también aquélla.*
- c) *El reclamo de devolución del Fondo de Ahorro Capitalizable, en virtud de que dicho concepto es manejado directamente por la Dirección General de Contabilidad de este Supremo Tribunal, deberá la demandante comparecer personalmente ante dicha Unidad Administrativa para tramitar su reintegro,*



CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

anexando a la solicitud de baja del FONAC, identificación oficial y último recibo de pago.

d) Asimismo, la actora deberá comparecer ante el ISSSTE para reclamar la devolución del fondo de pensión correspondiente, por lo que es improcedente demandarlo de nuestra representada.

e) El pago proporcional del aguinaldo que demanda será procedente en los términos de lo dispuesto por el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de conformidad con el Decreto que a fin de año se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que tal prestación se le cubrirá en base a dichos ordenamientos.

f) Es improcedente al mismo tiempo el pago de vacaciones y prima vacacional, en razón de que se trata de una reclamación accesoria de la principal (reinstalación), por lo que, si ésta es improcedente lo serán también aquéllas.

g) También es improcedente al mismo tiempo el pago de los conceptos que en claves señala, toda vez que la demandante causó bajo del servicio el 15 de mayo del 2002, por lo que no generó el derecho a percíbirlos.

h) En virtud de que la actora ocupó un puesto de confianza y sus actividades encuadran en los supuestos a que aluden los artículos 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 5º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 8º de la citada Ley Burocrática, se encuentra excluida de los beneficios a que se contrae dicho ordenamiento



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

legal y por ende no genera el beneficio de tiempo extraordinario, ya que no está sujeta a control de asistencia y horario alguno, por las características de su designación.

Por lo expuesto, negamos que a la accionante le asistan razón y derecho alguno para promover en la vía y forma en que lo hace, y desde ahora hacemos valer los medios de defensa que consisten en las siguientes:

EXCEPCIONES Y DEFENSAS:

FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- De la actora para reclamar las prestaciones a que alude en su demanda, en razón de que se encuentra excluida del derecho para demandar la reinstalación, en atención a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que la demandante fue una trabajadora que ocupó la plaza de Ayudante de Servicios de SPS, puesto de confianza, al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, le fueron cubiertos los salarios devengados y recibió los beneficios de la seguridad social a que tuvo derecho durante el tiempo en que la relación laboral establecida con la actora, estuvo vigente.

Es aplicable al caso concreto la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cinco, del Volumen 28, correspondiente al mes de abril de mil

novecientos setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala:

'TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DESIGNACION Y REMOCIÓN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE LOS.- Para el caso de los trabajadores de base, señala el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las causas por las que pueden ser removidos justificadamente; pero para los empleados de confianza debe advertirse que, según lo dispuesto en el artículo 8º de la misma ley, no les es aplicable el régimen del propio ordenamiento; y, en consecuencia, si bien disfrutan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, su designación y remoción tienen que ser hechas libremente por la Suprema Corte, lo cual se explica por la naturaleza especial de sus funciones'.

También es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 673, visible en la página quinientos cuarenta y seis, del Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que por contradicción de tesis fue emitida por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

'TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO ESTARÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

**PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA
INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO
DEL CESE.-**

De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con el artículo 123 de la misma Constitución; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal razón no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de este derecho con motivo del cese, como son la indemnización o reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la Constitución y la ley no les confiere.

OBSCURIDAD E IMPRECISIÓN EN LA DEMANDA.-

Se opone la excepción, ya que la parte actora es vaga e imprecisa en sus manifestaciones, toda vez que no reúne ni acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cuanto al supuesto despido, reiterando que en el escrito inicial de demanda aparecen diversos argumentos que son de difícil identificación y en consecuencia las excepciones que se hacen valer pueden quedar planteadas inadecuadamente, en virtud de que la actora no precisa el acto y las formas legales que supuestamente se han dejado de cumplir, limitándose a señalar situaciones contradictorias, falsas y fuera de derecho, lo que en consecuencia

deja en completo estado de indefensión a nuestra representada, ya que los argumentos en que fundó su demanda son vagos e imprecisos como se demostrará en el proceso, por lo que solicitamos se declare procedente esta excepción para que surta los efectos legales conducentes.

Hechas valer las excepciones que anteceden, procedemos a contestar los hechos, ya sea controvirtiéndolos, aclarándolos o negándolos de la siguiente forma:

HECHOS.

1.- Este hecho que se contesta es falso de toda falsedad y se niega categóricamente, aclarando que la actora realiza manifestaciones unilaterales y subjetivas tendientes a confundir a esa H. Comisión en el procedimiento que hoy nos ocupa, ya que las mismas bajo ninguna circunstancia se dieron en la realidad. Lo cierto es que dicha demandante fue propuesta por el señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava en el mes de mayo de 1996, para ocupar a partir del 1º de junio del citado año el puesto de confianza denominado en ese entonces como ayudante de servicios de oficina SPS, adscrita directamente a su servicio, en cumplimiento al punto IV. Personal de apoyo, que estableció: 'Los señores Ministros al obtener su jubilación tienen derecho a solicitar dos plazas de ayudante de servicios y una de chofer de SPS-36, para su servicio personal; las propuestas de nombramiento respectivas las hará el Ministro pensionado a la Comisión de Gobierno y Administración a través de la Dirección General de



UPE
JUST
SECRETAR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

10

Recursos Humanos. Cabe destacar que estas plazas son de confianza, en virtud de lo cual el Ministro retirado podrá remover libremente a sus ocupantes.', criterio basado en lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que en su parte sustantiva establece: 'En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza,... el personal de apoyo... de los servidores públicos de nivel de director general o superior...', por lo que la relación de trabajo se entendió entre este Alto Tribunal a través de la Dirección General de Recursos Humanos y la actora, siendo por lo tanto falso el que el vínculo laboral se diera entre el Ministro jubilado y su señora esposa con la demandante, más aún cuando sus salarios y prestaciones (económicas y sociales), le fueron cubiertas íntegramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción XIV del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

En el caso que nos ocupa, sin duda alguna, la actora fue titular de una plaza de confianza, pues, por una parte, en su nombramiento quedó precisado que se trataba de una Ayudante de Servicios de SPS, puesto de confianza, y por otra, el trabajo desempeñado por la reclamante fue siempre de apoyo y asistencia al señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava; esto es dado el nombramiento de la demandante y de las labores que desarrolló durante la prestación de sus servicios para este Alto Tribunal, se trata de un

empleo de confianza, además de que el nombramiento de Ayudante de Servicios de SPS, código CF 53805, nivel 25, es de confianza, de conformidad con el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos del Poder Judicial de la Federación (aplicado en este caso sólo a la Suprema Corte de Justicia) validado y registrado por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 28 de mayo de 1997.

Se reitera que la relación de trabajo que existió con la actora siempre fue con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que no existe ni ha existido ningún otro tipo de relación laboral ni ninguna otra con el señor Ministro jubilado y su señora esposa Adriana Magallanes Medina.

2.- Este hecho que se contesta es falso y se niega, lo cierto es que la actora dejó de prestar sus servicios para este Alto Tribunal a partir del 15 de mayo de 2002, fecha en la que procedió la baja de la demandante, previo informe del señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava, aviso que está debidamente integrado al expediente personal de la reclamante, mismo que se ofrecerá como prueba documental pública para acreditar la veracidad de lo aquí declarado, por lo tanto es inverosímil que manifieste que el señor Ministro retirado la haya despedido en una fecha posterior a la baja procedente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Contrariamente a lo señalado por la actora, su designación de trabajador de confianza encuadra dentro de los supuestos a que se contrae el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, dispositivo que relacionado con el artículo 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se encuentra excluida del régimen de dicha Ley Burocrática. Por lo tanto es procedente la baja ordenada, toda vez que se efectuó en estricto apego a la facultad de este Supremo Tribunal de nombrar y remover a sus empleados de confianza, dada la calidad y naturaleza de los servicios.

3.- Este hecho que se contesta, no obstante de ser un petitorio, se ratifica lo señalado con anterioridad, es decir, el reclamo de devolución del Fondo de Ahorro Capitalizable, en virtud de que dicho concepto es manejado directamente por la Dirección General de Contabilidad de este Supremo Tribunal, deberá la demandante comparecer personalmente ante dicha Unidad Administrativa para tramitar su reintegro, anexando a la solicitud de baja del FONAC, identificación oficial y último recibo de pago. Asimismo, la actora deberá comparecer ante el ISSSTE para reclamar la devolución del fondo de pensión correspondiente, por lo que es improcedente demandarlo de nuestra representada.

4.- Este hecho que se contesta es falso de toda falsedad y se niega categóricamente, aclarando que la actora realiza manifestaciones unilaterales y subjetivas tendientes a confundir a esa H. Comisión en el procedimiento que hoy nos ocupa,

ya que las mismas bajo ninguna circunstancia se dieron en la realidad. Lo cierto es que dicha demandante ocupó una plaza de confianza dada la naturaleza de sus funciones, (apoyó y asistencia al señor Ministro jubilado Carlos de Silva Nava), por lo tanto no estaba sujeta a jornada alguna, por lo que sus servicios se supeditaban a las necesidades personales del funcionario superior citado. El que en forma alguna explotó a la demandante como lo afirma en su escrito inicial de demanda, al contrario conocedor de la justicia laboral, respetó íntegramente las disposiciones emitidas por el Presidente Ministro en Turno, respecto al horario de la prestación de los servicios del personal de confianza de este Alto Tribunal, es decir que las jornadas de trabajo se rigen por las cargas de trabajo y las necesidades del servicio, el superior jerárquico podrá fijar el horario de manera congruente, razonable y responsable, y en obvio de repeticiones solicitamos se tenga por reproducido lo contestado en los hechos anteriores.

En virtud de que la actora ocupó un puesto de confianza y sus actividades encuadran en los supuestos a que aluden los artículos 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 8° de la citada Ley Burocrática, se encuentra excluida de los beneficios a que se contrae dicho ordenamiento legal y por ende no genera el beneficio de tiempo extraordinario, ya que no está sujeta a control de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

asistencia y horario alguno, por las características de su designación.

5.- Este hecho con carácter de petitorio es falso y se niega, independientemente de ser improcedente, toda vez que la demandante causó baja del servicio el 15 de mayo del 2002, por lo que no generó el derecho a percibir las".

SEXTO. Por auto de ocho de octubre de dos mil dos, el Tercer Integrante, Presidente de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, tuvo a la demandada Directora General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra; por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer en el escrito de cuenta, por ofrecidas las pruebas que se describen en el mismo, anexando el sobre cerrado que dice: "PLIEGO DE POSICIONES AL TENOR DEL CUAL DEBERÁ DESAHOGARSE LA PRUEBA CONFESIONAL, OFRECIDA POR LA TITULAR DEMANDADA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CARGO DE LA C. [REDACTED] [REDACTED]." y el expediente personal de la demandante, reservándose de acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno; y ordenó correr traslado a la parte actora con copia del referido escrito y sus anexos. Asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 131 a 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

SÉPTIMO. El veintidós de octubre de dos mil dos se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; desahogándose las pruebas que se admitieron; desechándose las

confesionales de hechos propios que ofreció la actora a cargo del Ministro jubilado Carlos de Silva Nava y de la señora Adriana Magallanes Medina, por ser personas ajenas al conflicto de trabajo planteado, en razón de que no tienen el carácter de demandados en el presente asunto con fundamento en los artículos 776 y 779 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria y además en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el rubro de: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN NO SÓLO ESTÁ SUJETA A QUE NO SEA CONTRA LA MORAL NI AL DERECHO, SINO A QUE SEA IDÓNEA PARA JUSTIFICAR ALGÚN HECHO."; la actora y la demandada formularon dentro del plazo que les fue concedido los alegatos que consideraron pertinentes.

OCTAVO. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil dos, se declaró cerrada la instrucción en este conflicto de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria y se ordenó turnar este expediente al entonces representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la formulación del dictamen respectivo.

El referido dictamen se sometió a consideración del Pleno de este Alto Tribunal el que en su sesión privada de trece de noviembre de dos mil tres acordó su aplazamiento y ordenó al Director General de Asuntos Jurídicos presentar un nuevo proyecto con las modificaciones indicadas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este conflicto laboral, según lo disponen los artículos 123, apartado "B", fracción XII, párrafo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 152 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, habida cuenta que se trata de un juicio promovido por un gobernado que anteriormente prestaba sus servicios a este Alto Tribunal en el cual se reclama a éste el pago y cumplimiento de diversas prestaciones de carácter laboral; y, además, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ya tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y emitió el dictamen a que se refiere el artículo 153 de este último ordenamiento legal y 1º del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.



CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FACULTAD DE DERECHO

SEGUNDO. Por orden lógico, en primer término se estudiará la litis principal del presente conflicto laboral, la cual consiste en determinar si como lo alega la actora, le asiste acción y derecho para reclamar su reinstalación en el puesto de Ayudante de Servicios de SPS, puesto que ella considera de base, en virtud de que sostiene que no existió motivo justificado para que haya sido despedida de su empleo; o bien, si como lo alega la parte demandada, la actora carece de acción y derecho para pretender su reinstalación en el puesto de Ayudante de Servicios de SPS, que ocupaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la plaza respectiva es considerada como de confianza, por lo que no gozaba del beneficio de la estabilidad en el empleo, lo que fundó en lo dispuesto en los artículos 123, Apartado "B", fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Una vez analizada la litis principal se abordará el estudio de las demás prestaciones que la actora hizo consistir en el pago de salarios caídos, la devolución del fondo de pensiones y del fondo de ahorro capitalizable, el pago en forma proporcional por el período comprendido del dieciséis al veintisiete de mayo de dos mil dos de: A) Sueldo compactado. B) Compensación por antigüedad mayor de cinco años. C) Ayuda de renta. D) Ayuda de pasajes. E) Despensa. F) Previsión social múltiple. G) Prima de antigüedad quinquenio. H) Ayuda de servicios básicos. I) Desarrollo y Capacitación. J) Compensación de apoyo; el pago de tiempo extra, el pago de aguinaldo proporcional al año dos mil dos y el pago de vacaciones y prima vacacional por el mismo año, respectivamente; tomando en cuenta las excepciones y defensas hechas valer al respecto por la demandada, Directora General de Recursos Humanos de este Alto Tribunal, en el sentido de que la actora carece de acción y derecho para demandar la reinstalación y, que al ser las demás prestaciones accesorias de la principal, resultan de igual manera improcedentes.

TERCERO. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, corresponde a la demandada, Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la carga de la prueba de las excepciones opuestas, es decir, acreditar que el puesto de Ayudante de Servicios SPS en el que la actora se desempeñó tiene el carácter de confianza, según lo prevén los artículos 123, Apartado "B", fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que, por ello, carece del derecho a la estabilidad en el empleo, extremo que de probarse haría innecesario ocuparse de los restantes



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

argumentos expuestos por las partes, en cuanto a la pretensión principal y la referida accesoria (salarios caídos), ya que bastaría que se acredite que la empleada era trabajadora de confianza, para considerar infundada la pretensión de reinstalación ejercida, así como la de pago de salarios caídos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En relación con lo anterior, por principio conviene precisar que tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de este Alto Tribunal, atendiendo a lo previsto en el apartado B del artículo 123 constitucional, los trabajadores de confianza únicamente disfrutaban de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, de ahí que no gozan de estabilidad en el empleo y por la naturaleza especial de sus funciones pueden ser designados y removidos libremente por los servidores públicos facultados para ello, por lo que esos trabajadores no pueden válidamente demandar la reinstalación en el empleo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Al respecto, resultan ilustrativas la tesis aisladas y jurisprudenciales que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE LOS. Para el caso de los trabajadores de base, señala el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las causas por las que pueden ser removidos justificadamente; pero para los empleados de confianza debe advertirse que, según lo dispuesto en el artículo 8º de la misma ley, no les es aplicable

el régimen del propio ordenamiento; y, en consecuencia, si bien disfrutan de los medios de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, su designación y remoción tienen que ser hechas libremente por la Suprema Corte, lo cual se explica por la naturaleza especial de sus funciones". (Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 28 Primera Parte, Página: 75).

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con el artículo 123 de la misma Constitución; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal razón pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la Constitución y



UPR
JUSTI
SECRETAR

JUSTI
SECRETAR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

la ley no les confiere." (Octava Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 65, Mayo de 1993, Tesis: 4a./J. 22/93, Página: 20).



RTE DE
NACIONAL
DE ACUERDO

SUBSTAN
PODER
FEDER

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS POR EL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no incurre en violación de garantías si absuelve del pago de indemnización constitucional y salarios caídos reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el artículo 123 de la Constitución, apartado "B", sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social que les corresponde, pero no en lo referente a la estabilidad en el empleo. (Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 175-180 Quinta Parte, Página: 68)."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores

al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de confianza de la aplicación de la propia ley, no transgrede la garantía de estabilidad en el empleo consagrada en la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien es cierto que en las diversas fracciones que integran el apartado B de este precepto constitucional se establecen las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, a través de la ley reglamentaria correspondiente, así como los derechos que tienen, también lo es que tales derechos se prevén a favor de dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, y al señalar en su fracción XIV que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, está limitando los derechos laborales de este tipo de trabajadores, lo que implica que los derechos que otorgan las doce primeras fracciones del apartado B del mencionado precepto constitucional, serán aplicables a los trabajadores de base, ya que es en ellas donde se regulan los derechos de este tipo de trabajadores y no para los de confianza. Es decir, la calidad laboral de estos últimos, aun cuando se encuentra reconocida por la citada fracción XIV, al establecer que gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, porque se trata de un derecho que no puede ser





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

restringido, sino que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador, según las cuales preste sus servicios, así como de los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, porque se trata de medidas de protección de carácter general, los excluye de los derechos colectivos que consagra la propia Ley Fundamental y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de las normas que protegen al trabajador de base en la estabilidad en el empleo, por lo que el derecho a solicitar la reinstalación ante un despido injustificado, corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza, pues a éstos ese derecho no les fue reconocido por el Constituyente, de manera que el hecho de que la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Norma Fundamental, no haga referencia expresa de su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, no significa que los derechos en ella previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del mencionado apartado para determinar que por exclusión de esta fracción quedan al margen del derecho que otorga la fracción IX.” (Tesis: 1a/VI/2003, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Página: 217).

Una vez precisado lo anterior, de especial relevancia resulta analizar las disposiciones constitucionales y legales que en relación con los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen cuáles de ellos serán considerados de

confianza. Al respecto, destaca que los artículos 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución General de la República; 5º, fracción IV y 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.**

“ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

“B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

“XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.”

**LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO**

“Art. 5º. Son trabajadores de confianza

“IV. En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.”.

“Art. 6º. Son trabajadores de base:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente.”.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“ARTÍCULO 180.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza, el secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de acuerdos, los actuarios, la persona o personas designadas por su presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas, el coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de departamento, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.

“ARTÍCULO 182.- Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación no previstos en los dos artículos anteriores, serán de base.”.

En relación con lo dispuesto en estos numerales, por principio, se advierte que al establecerse en la fracción XIV del

apartado B del artículo 123 constitucional que "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza", el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por su cargo, es decir, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social.

Así, resulta patente que conforme a lo previsto en el citado precepto constitucional la determinación sobre qué trabajadores al servicio del Estado son de confianza y, por exclusión, cuáles son de base, quedó a la discreción del legislador precisándose en la propia Norma Fundamental que para ello éste señalaría que los cargos serán de confianza, lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, no permite desconocer que, ocasionalmente, puede no suceder con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza.

Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un específico trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste, se podría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

...someter la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es éste el que debe someterse a la majestad de la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta.

Ante ello, de la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se arriba al convencimiento de que con independencia de que a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les otorgue algún nombramiento de los previstos en los citados artículos 5° y 180, es menester atender a la naturaleza de las funciones que desarrollan y no a la denominación del nombramiento, por tanto, debe estimarse que en este Alto Tribunal son servidores públicos de confianza los que realizan las atribuciones propias del secretario general de acuerdos, del subsecretario general de acuerdos, de los secretarios de estudio y cuenta, de los secretarios y subsecretarios de Sala, de los secretarios auxiliares de acuerdos, de los actuarios, de auxilio al presidente en sus funciones administrativas, de coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, de director general, de director de área, de subdirector, de jefe de departamento, de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

En tal virtud, para determinar cuándo un servidor público de este Alto Tribunal es un trabajador de confianza o de base, debe atenderse a las funciones que le corresponde desarrollar, con independencia de la denominación del puesto que ocupe, pues si tal distinción resulta relevante para efectos constitucionales, en

virtud de que el trabajador de base goza de estabilidad en el empleo y el de confianza no, para arribar a una conclusión sobre la existencia de esa prerrogativa debe adoptarse un criterio que atienda a la esencia de las cargas de trabajo y no a la mera formalidad de la denominación del puesto, ya que de lo contrario se dejaría de lado lo dispuesto en la Constitución General de la República y precisado por el legislador en ejercicio de la potestad conferida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de esa Norma Fundamental, quedando al arbitrio del patrón equiparado determinar qué funciones de los trabajadores al servicio del Estado son propias de los de confianza y cuáles de los de base.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada XXXII/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, que lleva por rubro y texto:

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “la ley determinará los cargos, que serán considerados de confianza”, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste, se podría sujetar la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es aquél quien debe someterse a la majestad de la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta."

En ese contexto normativo, en el caso, debe recordarse que la pretensión de la actora consiste en obtener su reinstalación en el puesto de Ayudante de Servicios SPS, que ella considera de

base y que, por el contrario, la demandada Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó en su escrito de contestación que corresponde a un puesto de confianza de los previstos en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y como tal carece del derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que evidentemente corresponde a la demandada demostrar tal afirmación.

Ante ello, por principio deben tomarse en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes en el presente conflicto de trabajo. Al respecto, la parte actora ofreció:

1. Copia fotostática simple del nombramiento expedido a su favor en el puesto de ayudante de servicios de oficina SPS, con efectos a partir del primero de junio de mil novecientos noventa y seis (foja siete).
2. Copia fotostática simple de dieciséis recibos de pago a nombre de [REDACTED], ayudante de SO SPS nivel 25, expedidos del quince de junio al quince de diciembre de mil novecientos noventa y seis (anexo).
3. Copia fotostática simple de veintiocho recibos de pago a nombre de [REDACTED], ayudante de SO SPS nivel 25, expedidos del dos de enero al quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete (anexo).
4. Copia fotostática simple de treinta recibos de pago a nombre de [REDACTED], ayudante de servs. SPS nivel 25, expedidos del dos de enero al quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (anexo).



SUPREMA
CORTA DE
JUSTICIA DE LA
NACION
SECRETARIA DE



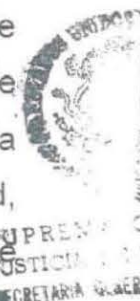
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

5. Copia fotostática simple de veintiocho recibos de pago a nombre de [REDACTED] ayudante de servs. SPS nivel 25, expedidos del cinco de enero al quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (anexo).
6. Copia fotostática simple de veintinueve recibos de pago a nombre de [REDACTED] ayudante de servs. SPS nivel 25, expedidos del cuatro de enero al quince de diciembre de dos mil (anexo).
7. Copia fotostática simple de treinta y tres recibos de pago a nombre de [REDACTED] ayudante de servs. SPS nivel 25, expedidos del cinco de enero al quince de diciembre de dos mil uno (anexo).
8. Copia fotostática simple de diez recibos de pago a nombre de [REDACTED] ayudante de servs. SPS nivel 25, expedidos del cuatro de enero al diez de mayo de dos mil dos (anexo).
9. La instrumental de actuaciones; y
10. La presuncional legal y humana.

Por su parte, la demandada ofreció las siguientes pruebas:

1. La confesional a cargo de la actora [REDACTED]
[REDACTED]

2. La documental consistente en el expediente personal de la actora [REDACTED] número [REDACTED] formado en la entonces Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. La documental consistente en la copia fotostática simple del Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en que aparece publicado el decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas treinta y uno a treinta y nueve).
4. La documental consistente en el oficio DGRH/DRL/2002, de fecha uno de octubre de dos mil dos, que dirigió la titular de la Dirección General de Recursos Humanos al titular de la Coordinación General de Presupuesto y Contabilidad, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que le solicitó copia certificada del catálogo de puestos de este Alto Tribunal (foja cuarenta y tres).
5. La documental consistente en la copia certificada del Catálogo de Puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas cuarenta y cuarenta y uno).
6. La documental consistente en el oficio DGRH/DRL/276/2002, de fecha tres de octubre de dos mil dos, que la titular de la Dirección General de Recursos Humanos dirigió al Secretario General de Acuerdos, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que le solicitó copia certificada del acta de la Comisión de Gobierno





Administración número C.G.A. No. I, del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco (foja cuarenta y dos).

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

7. La documental consistente en la copia certificada del acta de la Comisión de Gobierno y Administración número C.G.A. No. I, del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, emitida en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Sexto Transitorios del Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la que constan la información básica sobre los servicios que se otorgarán a los señores Ministros que concluyeron sus funciones (fojas cuarenta y cinco a sesenta y ocho).

8. La instrumental de actuaciones.

9. La presuncional legal y humana.

Cabe agregar que en la documental pública consistente en el expediente personal de la actora [REDACTED] con registro [REDACTED] integrado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra de fojas setenta y dos a ciento ocho, también se encuentra el original del nombramiento de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró Ayudante de Servicios de Oficina SPS, de confianza, adscrita al ministro jubilado Carlos de Silva Nava, con efectos a partir del primero de junio del mencionado año.

Asimismo, a fojas ochenta y cuatro obra la certificación efectuada por la titular de la entonces Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se hace constar que a partir del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el referido puesto cambió de nomenclatura a la de Ayudante de Servicios SPS, de confianza, con motivo de la reestructuración de este Alto Tribunal, continuando con la misma adscripción.

También a fojas setenta y tres del expediente personal de la actora, obra el aviso de baja de fecha diez de mayo de dos mil dos, donde se asienta que a partir del día quince del mes y año citados, la mencionada empleada causó baja en el puesto de Ayudante de Servicios SPS.

Por otra parte, en el desahogo de la confesional a cargo de la actora respecto de las posiciones que le fueron formuladas en la diligencia de desahogo de dicha prueba celebrada el veintidós de octubre de dos mil dos, aquélla sostuvo:

“1.- Ingresó a trabajar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de junio de mil novecientos noventa y seis, como Ayudante de Servicios de Oficina de SPS.

R: Si”.

“2.- El trabajo que desempeñó usted para la Suprema Corte de Justicia, lo realizó en el domicilio del Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava.

R: Así es”.

“3.- Le correspondió prestar servicios de apoyo y asistencia al Señor Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

R: Así es".

"4.- La plaza que usted ocupaba al servicio del Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava, es de confianza.

R: No es de confianza."

"5.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre le cubrió en tiempo sus salarios y prestaciones, a las que tuvo derecho.

R: Así es".

"6.- Es de su puño y letra la rúbrica que se encuentra en el nombramiento número [REDACTED] de fecha 28 de mayo de 1996, que se pone a la vista, en la que se lee: [REDACTED]

R: Si".

"7.- Usted reconoce el contenido del nombramiento número [REDACTED] de fecha 28 de mayo de 1996, del cual solicitamos se le ponga a la vista.

R: Si".

Asimismo, deben tomarse en cuenta las manifestaciones de la actora efectuadas en los hechos que narró en su demanda, consistentes en que laboró en un horario comprendido de las seis treinta a las veintidós horas de lunes a domingo disfrutando de alimentos y habitación en el domicilio del Ministro Carlos de Silva Nava.

A efecto de valorar las pruebas reseñadas, es necesario atender a las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que establece:

“Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presente, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones que se funde su decisión.”

En ese orden de ideas y apreciando en conciencia las pruebas allegadas al expediente, es dable concluir que la demandada Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la prueba confesional acredita que la actora firmó el nombramiento número [REDACTED] e ingresó a laborar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de junio de mil novecientos noventa y seis, en la categoría de Ayudante de Servicios de oficina SPS; además, que el trabajo desempeñado para este alto Tribunal, lo realizó en el domicilio del Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava, prestándole servicios de apoyo y asistencia.



SUPREMA C
JUSTICIA DE L.
SECRETARÍA GENERAL

Por otra parte, a través de las pruebas documentales públicas consistentes en el expediente personal de la actora [REDACTED] número [REDACTED], en las copias certificadas del Catálogo de Puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la copia certificada del acta de la Comisión de Gobierno y Administración número C.G.A. No. I, del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, la copia certificada de dicho Decreto y el aviso de baja de diez de mayo de dos mil dos, se demuestra que la actora contó con un nombramiento como personal de apoyo adscrita al Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava, con efectos a partir del primero de junio de mil novecientos noventa y seis y que la relación laboral concluyó el quince de mayo de dos mil dos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

De lo anterior, se sigue que por las funciones desempeñadas la actora sí llevó a cabo labores propias de un trabajador de confianza, pues se ubica en uno de los supuestos previstos en el citado artículo 180, en tanto que realizó funciones de apoyo a un Ministro jubilado, lo que conlleva realizar labores de apoyo a un servidor público de nivel superior a un director general.



CORTE DE
NACION
DE JUSTICIA

En efecto, aun cuando con motivo de su jubilación un Ministro pierde el carácter de servidor público, con independencia de ello, la adscripción que se dio a la actora y las labores que desarrolló encuadran plenamente en las de apoyo a servidores públicos de nivel de director general o superior, ya que atendiendo a la interpretación del citado precepto legal debe concluirse que la intención del legislador fue considerar como trabajadores de confianza a todos aquellos que por la especial posición de la persona a la que presta labores de apoyo, es necesario que, para permanecer en el puesto sean de la confianza absoluta de aquélla y, por ende, ésta tenga plena libertad para designarlos y removerlos libremente.

En ese orden de ideas, considerando que la existencia de la plaza respectiva e incluso el nombramiento otorgado únicamente se justifican por la posición legal que le corresponde a un Ministro con motivo de su jubilación, se impone concluir que el respectivo personal de apoyo efectivamente es de confianza.

Aunando a que, ambas partes aportaron como prueba la documental relativa al nombramiento expedido a la actora el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis (fojas siete y dieciocho) del que se desprende que la designación de la actora

lo fue en un puesto de confianza, habiéndosele asignado la denominación de Ayudante de Servicios de SPS, clave CF 53805, nivel 25.

Además, ese puesto de confianza derivó de lo acordado en la sesión de la Comisión de Gobierno y Administración del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, como se acredita con la documental pública consistente en el acta respectiva (fojas cuarenta y cinco y su anexo), la que señala:

"En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Sexto Transitorios del Decreto que adiciona, deroga y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y con apoyo, además, en los artículos Séptimo y Noveno de la Ley que establece las causas de retiro voluntario o forzoso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el Acuerdo Plenario de dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, resoluciones en las que se determina la pensión que deben recibir los señores ministros"... "Carlos de Silva Nava"... "...VII.- Que se proporcione a todos los señores ministros en un cuaderno personalizado la información básica sobre:"... "IV. Personal de apoyo ... " ... "Anexo de esta acta obra un ejemplar de ese cuaderno de informes.".





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

PERSONAL DE APOYO. Los señores ministros al obtener su jubilación tienen derecho a solicitar dos plazas de ayudante de servicios y una de chofer de SPS-36, para su servicio personal; las propuestas de nombramiento respectivas las hará el ministro pensionado a la Comisión de Gobierno y Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe destacar que estas plazas son de confianza, en virtud de lo cual el ministro retirado podrá remover libremente a sus ocupantes.”.



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS

Por tanto, de la valoración de la prueba confesional de la actora, relacionada con el reconocimiento expreso de que realizaba labores de apoyo y asistencia, disfrutando de alimentos y habitación en el domicilio del Ministro Carlos de Silva Nava, administrada con las documentales certificadas consistentes en el expediente personal de la misma, el Catálogo de Puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedido por la Coordinación General de Presupuesto y Contabilidad de este Alto Tribunal, así como las diversas copias certificadas del Acta de la Comisión de Gobierno y Administración número C.G.A. No. I, del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, por la que la última Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió diversos acuerdos en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Sexto Transitorios del Decreto que reformó diversos artículos constitucionales en relación con el retiro forzoso o voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el numeral IV de dicha Acta, se advierte que dada la naturaleza de las funciones realizadas por la actora, ésta se desempeñó al servicio de la demandada como personal de apoyo

y asistencia tal y como lo argumentó ésta en su defensa y, por ende, como una empleada de confianza en términos de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esa virtud, si quedó plenamente acreditado el carácter de confianza de las labores que desarrolló la actora al servicio de la demandada, debe concluirse que en términos de lo previsto en los artículos 123, Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° y 7° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no está protegida en cuanto a la estabilidad en el empleo, por lo que carece de acción y derecho para pretender la reinstalación en el puesto de Ayudante de Servicios de SPS, código CF 53805, Nivel 25, desempeñado al servicio de la demandada.

Por tanto, tampoco puede prosperar su petición de pago de los salarios caídos que por aquél motivo reclamó, aduciendo que los había dejado de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta aquella en que fuera reinstalada, habida cuenta que se trata de una prestación accesoria que sigue la suerte de la principal (reinstalación).

CUARTO. Del escrito inicial de demanda, se advierte que la actora exigió, entre otras prestaciones económicas, la devolución del Fondo de Pensiones, toda vez que dicho concepto le fue descontado de las percepciones recibidas bajo el concepto 52, con motivo de la prestación de sus servicios desde su fecha de ingreso que data del quince de junio de mil novecientos noventa y seis, que asciende a la suma de \$ [REDACTED] ([REDACTED] PESOS [REDACTED] MN), más los intereses que se hayan generado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En relación con la prestación de referencia, la Directora General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó acción y derecho a la empleada para demandar el pago de la cantidad pretendida por concepto de fondo de pensiones, alegando que en todo caso la accionante debía comparecer ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a reclamar tal devolución.

Por principio, cabe señalar que el pago reclamado por la actora del concepto 52 relativo al fondo de pensiones que aparece como deducción en los recibos de pago que ofreció como prueba, equivale a los porcentajes previstos en las fracciones II a V del artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dispone:

“ARTÍCULO 16. Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al Instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute, definido en el artículo anterior.

Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:

- I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;***
- II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;***
- III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica,***

fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;

IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;

V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del Instituto exceptuado los correspondientes al Fondo de la Vivienda.

Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración."

Consecuentemente, el concepto 52 relativo al fondo de pensiones que se le descontaba a la actora para cubrir al Instituto, como ya se dijo, es la conjugación de los porcentajes que se señalan en las fracciones II a V del artículo 16 transcrito y éstas se le pueden otorgar bajo el concepto de indemnización global, en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual señala:

"ARTÍCULO 87. Al trabajador que sin tener derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios cesantía en edad avanzada o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos casos una indemnización global equivalente a:

"I. El monto total de las cuotas con que hubiese contribuido de acuerdo con las fracciones de la II a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

la V del artículo 16, si tuviese de uno a cuatro años de servicios;

"II. El monto total de las que hubiese enterado en los términos de las fracciones de la II a la V del artículo 16, más 45 días de su último sueldo básico según lo define el artículo 15, si tuviese de cinco a nueve años de servicios, y

"III. El monto total de las cuotas que hubiere pagado conforme al mismo precepto, más noventa días de su último sueldo básico, si hubiera permanecido en el servicio de diez a catorce años. Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas, el Instituto entregará a sus beneficiarios, en el orden establecido por el artículo 75, el importe de la indemnización global."

Del artículo citado, se advierte el derecho a la indemnización global, que se insiste, corresponde al fondo de pensiones que se cubre bajo el concepto 52 correspondiente de los trabajadores sujetos a su régimen, cuando éstos se separen definitivamente del servicio y por el tiempo de éste no alcancen los beneficios de pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez.

Con base en lo anterior, resulta evidente que la pretendida devolución de los descuentos exigidos por la actora en cuanto al fondo de pensiones se refiere, es improcedente toda vez que la competencia para resolver sobre el monto de esa pretensión, no asiste a este Alto Tribunal, ya que las cantidades aplicadas como deducción en sus percepciones por dicho concepto son administradas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por lo que debe acudir ante dicho

organismo a solicitar la devolución del respectivo fondo de pensiones.

QUINTO. En lo relativo a la prestación reclamada por la actora en cuanto al Fondo de Ahorro Capitalizable, cabe hacer las siguientes precisiones:

En su escrito inicial de demanda, [REDACTED] [REDACTED] señaló que en forma quincenal le era deducido de su salario el concepto referente a dicho fondo, ello a partir del quince de febrero de mil novecientos noventa y ocho y hasta la fecha en que se dijo injustamente separada de su trabajo, por lo cual exigió la devolución de la suma de \$ [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] PESOS [REDACTED]), más los intereses que se hubieran generado.

A lo anterior, la Directora General de Recursos Humanos de este Alto Tribunal, al contestar la demanda no negó la existencia de dicha prestación, ni opuso excepción respecto de su procedencia, sino que argumentó que para su reintegración se requeriría el trámite respectivo ante la Dirección General de Contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Unidad Administrativa que maneja directamente el Fondo de Ahorro Capitalizable, previa la exhibición de la identificación oficial y último recibo de pago de la actora para la devolución pretendida.

Al respecto, debe señalarse que basta que se demande a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los órganos que representan a ésta acudan en su defensa y hagan valer las excepciones y defensas correspondientes, solicitando, en todo caso, a las unidades administrativas que tengan la información



SUPREMA
CORTA DE
JUSTICIA DE
LA NACION
SECRETARÍA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

necesaria para ello, la remisión de los documentos pertinentes los que deberán aportarse al juicio por los órganos legitimados de este Alto Tribunal.

En tal virtud, la Dirección demandada debió proponer las excepciones y defensas pertinentes en relación con esa prestación que reclamó la actora, pues como puede verse de su contestación, la titular de la referida Dirección General de Recursos Humanos, sólo se concretó a manifestar que para la reintegración del Fondo de Ahorro Capitalizable, era necesario que la actora realizara el trámite respectivo ante la Dirección General de Contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Unidad Administrativa que maneja directamente el Fondo de Ahorro Capitalizable, previa la exhibición de la identificación oficial y último recibo de pago de la demandante para la devolución pretendida; sin embargo, la demandada no controvertió la procedencia de la prestación reclamada sino que, por el contrario, reconoció su existencia; de manera que al haberse llamado a juicio a la Unidad que se encarga de la administración del personal, no era indispensable llamar o demandar a la diversa de Contabilidad, pues a aquélla correspondía la defensa respectiva, por lo que al no existir controversia entre las partes en este punto de la litis, se impone condenar a la parte demandada al pago del Fondo de Ahorro Capitalizable en los términos que reclamó y acreditó la parte actora le fueron realizadas las deducciones respectivas.

SEXTO. En el inciso g) del escrito de demanda, la actora exigió el pago de las prestaciones percibidas en forma proporcional bajo las claves de pago 01, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33 y 35 en el período comprendido del dieciséis al veintisiete de mayo de dos mil dos.

Los conceptos de referencia corresponden, respectivamente a las siguientes prestaciones:

- A) Sueldo compactado.
- B) Compensación por antigüedad mayor de cinco años.
- C) Ayuda de renta.
- D) Ayuda de pasajes.
- E) Despensa.
- F) Previsión social múltiple.
- G) Prima de antigüedad quinquenio.
- H) Ayuda de servicios básicos.
- I) Desarrollo y Capacitación.
- J) Compensación de apoyo.

En cuanto a dichos conceptos se refiere, la parte demandada negó la procedencia de su pago, ya que la actora causó baja del servicio el quince de mayo de dos mil dos, y adujo que por ello no generó el derecho a percibirlos.

Asimismo, en el hecho cinco de su demanda la actora adiciona a dichas prestaciones el pago de la parte proporcional de prima vacacional y gratificación de fin de año (aguinaldo), aspectos que serán abordados en otro apartado.

Ante ello, resulta conveniente precisar la fecha en que concluyó la relación laboral entablada entre [REDACTED] y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que aquélla señala que fue despedida el veintiocho de mayo de dos mil dos y la demandada manifiesta que la baja tuvo lugar el quince de mayo de ese año.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de este conflicto de trabajo (foja 100), se encuentra el nombramiento número [REDACTED] de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, expedido a favor de [REDACTED], como ayudante de servicios SPS, "puesto de confianza, adscrita al Ministro Jubilado Carlos de Silva Nava, con efectos este nombramiento a partir del primero de junio del año en curso"; documento que acredita que a partir de esta última fecha, es decir el primero de junio de mil novecientos noventa y seis, la actora empezó a prestar servicios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, a fojas setenta y tres del citado expediente obra el aviso de baja de fecha diez de mayo de dos mil dos, del cual se desprende que la referida persona causó baja del empleo que venía desempeñando a partir del quince de mayo de dos mil dos, previo aviso del Ministro jubilado Carlos de Silva Nava (foja 74).

El referido aviso del Ministro jubilado que dio lugar a la baja de la trabajadora encuentra sustento en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración del dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, que en la parte relativa señala:

"PERSONAL DE APOYO. Los señores ministros al obtener su jubilación tienen derecho a solicitar dos plazas de ayudante de servicios y una de chofer de SPS-36, para su servicio personal; las propuestas de nombramiento respectivas las hará el ministro pensionado a la Comisión de Gobierno y Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe destacar que estas

plazas son de confianza, en virtud de lo cual el ministro retirado podrá remover libremente a sus ocupantes."

De tal suerte que la relación de trabajo con la actora inició el primero de junio de mil novecientos noventa y seis y concluyó el quince de mayo de dos mil dos, tal y como está demostrado con las constancias mencionadas, sin que exista en autos prueba alguna que acredite que la relación laboral se haya extendido con posterioridad a la segunda de esas fechas.

Luego, si la pretensión de la actora consiste en el pago de cantidades derivadas de las labores desarrolladas del dieciséis al veintisiete de mayo de dos mil dos, es evidente que ésta ya no prestaba servicios a la demandada, sin que de las pruebas aportadas por aquélla consistentes en la documental relativa al nombramiento de Ayudante de Servicios de oficina SPS del primero de junio de mil novecientos noventa y seis, así como de los recibos de pago que en copia fotostática exhibió, o bien, de las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desprendan elementos de convicción que revelen que con posterioridad a la fecha de baja de la actora (demostrada por la demandada a través del aviso respectivo), ésta hubiera continuado prestando sus servicios en el puesto asignado para tener derecho a las prestaciones cuyo pago proporcional reclama.

Por las razones expresadas, se concluye que es infundada la pretensión de la actora y, en consecuencia, se debe absolver a la demandada del pago de las cantidades correspondientes a los conceptos detallados al inicio de este considerando y precisados por la actora en el inciso g) de su demanda.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

SÉPTIMO. En el inciso h) del escrito de demanda, la actora reclamó el pago de tiempo extraordinario laborado al servicio del patrón, para tal fin narró en los hechos que fundaron su exigencia que se desempeñó en un horario comprendido de las seis a las veintidós horas de lunes a domingo disfrutando de alimentos y habitación en el domicilio del Ministro Carlos de Silva Nava.

A su vez, al contestar la demanda, la Directora General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la actora carecía de acción y derecho para reclamar el pago de tiempo extraordinario, señalando:

"PRESTACIONES:

En relación con el objeto de la demanda interpuesta manifestamos que:

...h) En virtud de que la actora ocupó un puesto de confianza y sus actividades encuadran en los supuestos a que aluden los artículos 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 5º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 8º de la citada Ley Burocrática, se encuentra excluida de los beneficios a que se contrae dicho ordenamiento legal y por ende no genera el beneficio de tiempo extraordinario, ya que no está sujeta a control de asistencia y horario alguno, por las características de su designación.

HECHOS.

... 4.- Este hecho que se contesta es falso de toda falsedad y se niega categóricamente, aclarando que la actora realiza manifestaciones unilaterales y

subjetivas tendientes a confundir a esa H. Comisión en el procedimiento que hoy nos ocupa, ya que las mismas bajo ninguna circunstancia se dieron en la realidad. Lo cierto es que dicha demandante ocupó una plaza de confianza dada la naturaleza de sus funciones, (apoyo y asistencia al señor Ministro bilado Carlos de Silva Nava), por lo tanto no estaba sujeta a jornada alguna, por lo que sus servicios se supeditaban a las necesidades personales del funcionario superior citado. El que en forma alguna explotó a la demandante como lo afirma en su escrito inicial de demanda, al contrario conocedor de la justicia laboral, respetó íntegramente las disposiciones emitidas por el Presidente Ministro en Turno, respecto al horario de la prestación de los servicios del personal de confianza de este Alto Tribunal, es decir que las jornadas de trabajo se rigen por las cargas de trabajo y las necesidades del servicio, el superior jerárquico podrá fijar el horario de manera congruente, razonable y responsable, y en obvio de repeticiones solicitamos se tenga por reproducido lo contestado en los hechos anteriores.

En virtud de que la actora ocupó un puesto de confianza y sus actividades encuadran en los supuestos a que aluden los artículos 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 8° de la citada Ley Burocrática, se encuentra excluida de los beneficios a que se contrae dicho ordenamiento legal y por ende no genera el beneficio de tiempo



SECRETARIA GENERAL
JUSTI



extraordinario, ya que no está sujeta a control de asistencia y horario alguno, por las características de su designación.”

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En tal virtud, debe estimarse que la demandada pretendió excepcionarse sosteniendo que los trabajadores de confianza no gozan de tiempo extraordinario ya que no se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ante ello, debe tomarse en cuenta que este Alto Tribunal debe estudiar las excepciones opuestas por la parte demandada tal y como fueron planteadas, sin que se pueda suplir ni estudiar mayores argumentos que los precisados en ellas, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la contraparte ya que se introducirían en la resolución elementos nuevos en relación con los cuales no pudo ejercer sus defensas; por ende, este Alto Tribunal debe limitarse únicamente al estudio de las manifestaciones que en vía de excepción hizo valer la Directora General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ir más allá de lo pedido, pues de hacerlo así, se violentaría el principio de congruencia que toda resolución debe cumplir.

Sustentan lo anterior, las tesis aisladas de la entonces Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

“LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. La congruencia o incongruencia de un laudo tiene su origen en la forma en que se plantea la litis y no en las pruebas que pueden rendirse en el curso del juicio, ya que un laudo es congruente cuando sólo

se ocupa de la acción y de las excepciones tal y como se intentó la primera y se opusieron las segundas, e incongruente cuando resuelve sobre cuestiones que no se plantearon ni por el actor ni por el demandado, o cuando no se ocupa de todas las cuestiones planteadas por aquél o por éste; por lo que si una Junta resuelve la cuestión propuesta y fija el monto de una indemnización, en una cantidad menor que la reclamada, no existe incongruencia, y del hecho de que un trabajador reclamante se haya conformado con el dictamen rendido por el perito médico de una empresa, no puede concluirse que exista la aludida incongruencia, en atención a que ésta tiene su origen, como se tiene dicho, en la forma en que se plantea la litis y no en lo que pueda sobrevenir durante el juicio. (Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: LI, Página: 1425)."

"DEFENSAS. DERECHOS DE LAS PARTES. No se puede coartar el derecho de las partes a exponer y plantear ante el juzgador sus defensas en la forma en que lo estimen pertinente, siendo un deber del juzgador ajustar su actuación al examen de las cuestiones que se le propongan, sin agregar ni quitar nada por su parte, atento el principio de congruencia que rige en toda controversia laboral. (Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Quinta Parte, LI, Página: 12)".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

21

En ese sentido, respecto a la excepción planteada por la parte demandada, debe señalarse que en el contexto de esta resolución se estableció que la entonces Directora General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acreditó en el presente juicio que la actora desempeñó labores propias de un trabajador de confianza ya que se ubicó en uno de los supuestos que prevé el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues realizó funciones de apoyo a un Ministro Jubilado, lo que conlleva desarrollar labores de apoyo a un servidor público de nivel superior a un director general y, por ende, no tenía derecho a la reinstalación al no estar protegida en cuanto a la estabilidad en el empleo.

A pesar de lo anterior, respecto al derecho del pago de tiempo extraordinario, debe puntualizarse que si por necesidades especiales, se desempeñan servicios en exceso de la jornada legal permitida, ese excedente, por definición constitucional, debe ser considerado como tiempo extraordinario, y tendrán derecho a esa prestación aun los trabajadores al servicio del Estado que tengan la calidad de confianza, ya que éstos sí están tutelados en términos de los previsto en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 constitucional, en cuanto a las medidas de protección al salario, por lo que, las labores que desempeñan deben ser retribuidas con el salario correspondiente, con independencia de que se realicen dentro de la jornada legal o en horas que la excedan.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de identificación son:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARACTER ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO. DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CUANDO DESEMPEÑAN UNA JORNADA SUPERIOR AL MAXIMO LEGAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 5o., 115, fracción VIII, 123, apartado "B", fracciones I, II y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 9, 15, 18 a 24 y octavo transitorio, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal; y, 58, 59, 68, 98 y 99, de la Ley Federal del Trabajo, estos últimos de aplicación supletoria al precitado Estatuto Jurídico, se infiere que los trabajadores sujetos al mismo, aun los que posean una categoría de confianza, tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, cuando desempeñan una jornada que excede al máximo legal de cuarenta y ocho horas a la semana, puesto que si bien es cierto la distribución del horario puede ser convencional; también lo es que esta libertad posee el límite de no escapar al margen establecido. Por tanto, si por necesidades del servicio o, por circunstancias especiales, se pactan turnos de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso, no obstante que exista aceptación del empleado público, ello no



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONFLICTO DE TRABAJO 5/2002-C.

Implica la renuncia al derecho a percibir sus emolumentos que retribuyan los servicios prestados en exceso a la jornada legal que, por definición constitucional, deben ser considerados como tiempo extraordinario." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Febrero de 1996, Tesis: 2a./J. 5/96, Página: 225).

De ahí que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial citado si bien es cierto que los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, también es cierto que ellos sí tienen derecho al pago de tiempo extraordinario cuando quede acreditada su existencia.

En tal virtud, son infundadas las excepciones que opuso la parte demandada, pues aun cuando los trabajadores de confianza no se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ello no permite desconocer la protección constitucional que les asiste respecto de su salario y, por ende, lo concerniente a la retribución que deben recibir por el tiempo extraordinario que laboren.

A pesar de lo anterior, es menester señalar que no basta que no hayan prosperado las excepciones de la demandada para declarar fundada la respectiva acción de la actora, pues para ello es necesario que se acrediten los extremos que sustentan esta última, ya que la circunstancia de que no existiera excepción o que las que hizo valer la parte demandada sean insuficientes, no implica que se deba condenar al pago de la prestación reclamada, pues con independencia de las excepciones planteadas, la parte actora debe acreditar los elementos constitutivos de su acción, tal y como lo sostuvo la extinta Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva el rubro, texto y datos de identificación:

“ACCION, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz.”. (Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 157-162 Quinta Parte, Página: 85).

En ese orden de ideas, debe tomarse en cuenta que en materia laboral, como regla general, se establece que la carga de la prueba corresponde a la parte patronal, pues con ello se tiende a garantizar la igualdad procesal del trabajador frente al patrón, imponiéndole a éste la obligación de acreditar los hechos controvertidos, lo que se justifica por la circunstancia de que es aquél quien dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos propios de tal relación; sin embargo, ese principio general no opera cuando por la naturaleza de las labores desempeñadas en el lugar de trabajo se proporcionan alimentos y habitación a la trabajadora y, además, ésta se limita a señalar, por una parte, la duración de su jornada y, por otra parte, la circunstancia de que en el centro de trabajo disfrutaba de las referidas prerrogativas, lo que implica una indefinición en los hechos que sustentan su pretensión sobre el tiempo efectivamente laborado y el tiempo durante el cual, dentro de la jornada de trabajo, recibía alimentos y habitación.

En efecto, ante labores que por su naturaleza permitan al trabajador disfrutar de alimentos y de habitación, si aquél demanda el pago de tiempo extraordinario, resulta indispensable que precise las horas en las que efectivamente laboraba y las diversas en que recibía



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

los beneficios antes mencionados, particularidades que, además, dan lugar a que sea el trabajador el que deba acreditar tales extremos, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al patrón, el cual respecto de una jornada durante la cual no mantenía a su plena disposición al operario se vería imposibilitado a probar hechos cuya realización quedó al arbitrio del trabajador. Al respecto, resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"JORNADA LABORAL. EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- La regla establecida en la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, determina que la carga probatoria del horario incumbe al patrón. Sin embargo, cobra excepción, en tratándose de trabajadores como los domésticos o los dedicados a actividades a bordo de buques en grandes travesías, autobuses, etcétera, porque se desarrollan durante un tiempo prolongado y en esas condiciones, resultaría excesivo gravar a los patrones, con el pago de jornada extra no laborada." (Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo V, Trabajo, P.R. TCC, Tesis: 782, Página: 494).

CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

"TRABAJADORES DOMESTICOS. SU PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO NO PRUEBA QUE SE LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS. Cuando ambas partes, reconocen que la naturaleza del trabajo que

desempeñaba la actora era de doméstica y toda vez que esta clase de trabajos se reglamenta por disposiciones especiales contenidas en el Título Sexto, Capítulo XIII, de la Ley Federal del Trabajo, en las que se establece que dichos trabajadores deberán disfrutar de reposo suficiente para tomar sus alimentos y de descanso en la noche, no pueden tener aplicación automáticamente las disposiciones generales contenidas en la ley mencionada, al regular las condiciones de trabajo y por lo tanto no puede establecerse "a priori" que se haya laborado tiempo extraordinario, no obstante la permanencia en el lugar del trabajo por un horario mayor del legal." (Octava Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Página: 845).



SUPREMA C
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GERAL

Por lo anterior, la carga probatoria para acreditar cuáles eran las horas efectivamente laboradas y cuáles las que ocupó para descansar, tomar alimentos y recibir habitación, correspondía a la actora, dado que se desempeñó en el domicilio del Ministro jubilado Carlos de Silva Nava realizando funciones relativas al apoyo y asistencia de éste con goce de alimentos y habitación, es decir que estuvo de día y de noche en el domicilio del funcionario prestando sus servicios ya que así lo señaló al desahogar la prueba confesional a su cargo, donde señaló al dar respuesta a la posición número once que:

"11.- Dirá si es cierto como lo es, que siempre prestó sus servicios para la suprema Corte de Justicia de la Nación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONFLICTO DE TRABAJO 5/2002-C.

FORMA A-53

R.- No, también presté mis servicios para Carlos de Silva Nava, estuve de planta como doméstica porque yo no se leer ni escribir por lo tanto, yo no estuve en ninguna oficina sino yo estuve casi de día y noche en la casa del Señor Carlos de Silva Nava..."

De ahí que, con el resultado de esta prueba se demuestra que la actora permanecía en el domicilio del Ministro jubilado Carlos de Silva Nava de día y de noche donde disfrutó de alimentos y habitación, ya que así lo señaló además en el hecho uno de su demanda; por ende, como ya se dijo, de acuerdo a las particularidades señaladas, la carga de probar el tiempo extraordinario reclamado correspondía, en este caso, a la parte actora.

Al efecto, las pruebas que ofreció la demandante al juicio fueron la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y las documentales relativas a su nombramiento y a los recibos de pago, probanzas que de ninguna manera acreditan el tiempo extraordinario supuestamente laborado, pues no son pruebas idóneas para demostrar ese extremo en virtud de que debió probar cuál fue el tiempo que laboró y cuál el que disfrutó de alimentos y habitación y, al no haber ofrecido alguna prueba que demostrara esas circunstancias, resulta infundada la pretensión que se hace valer.

En esas condiciones, resulta infundado el reclamo de dos horas y media diarias de tiempo excedente exigido por la actora, por lo que debe absolverse a la demandada de su pago.

OCTAVO. La actora, demandó en los incisos e) y f) de su demanda, el pago de aguinaldo proporcional al año dos mil dos y el pago de vacaciones y prima vacacional por el mismo año.

Al respecto, la demandada señaló que el primero de ellos se le cubriría conforme a lo dispuesto por el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en relación con el segundo, alegó su improcedencia al considerar que se trata de reclamaciones accesorias a la principal, porque si esta última es improcedente, también lo son aquéllas.

En cuanto atañe al primero de los conceptos mencionados, se advierte que hubo allanamiento por parte de la demandada, ya que ésta reconoció, de manera expresa e indubitable, al contestar la demanda lo fundado de la pretensión respectiva, la veracidad de los hechos narrados y los fundamentos de derecho invocados, pues señaló que el pago proporcional de aguinaldo será procedente en los términos de lo dispuesto por el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y por tanto tal prestación se cubrirá con base en ese ordenamiento.

Así, las consecuencias del allanamiento a esa prestación será que la controversia se vea agotada en el aspecto involucrado, lo que en el caso ocurre, con el pago proporcional del aguinaldo reclamado.

De ahí que, al quedar demostrado a través del aviso de baja que está agregado en la foja 34 del expediente personal de la accionante, que el término de su nombramiento lo fue hasta el día quince de mayo de dos mil dos, lo que significa que la trabajadora prestó servicios por ese año, únicamente por el lapso comprendido del primero de enero al quince de mayo, esto es por cuatro meses y quince días, consecuentemente debe condenarse en razón de ese tiempo al pago proporcional del aguinaldo que le corresponda a la actora tal y como lo ordena el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Sobre el particular resulta aplicable el criterio que informa la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de este Alto Tribunal, consultable en la página 56, del Volumen 205-216, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AGUINALDO. DERECHO A SU PAGO PROPORCIONAL.- El aguinaldo se devenga por el tiempo trabajado durante el lapso en que el propio aguinaldo se genera, y, por ello, el derecho de los trabajadores a percibir proporcionalmente la prestación de mérito no dependen de que se encuentren laborando en la fecha de la separación o liquidación, pues conforme al artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dichos empleados tienen derecho a que se les cubra la prestación de mérito en forma proporcional”.

En lo referente al pago de vacaciones y prima vacacional por el año de dos mil dos pretendido por la actora, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice:

“ARTÍCULO 30. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de 10 días laborales cada uno en la fecha que se señalen al efecto; pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos

urgentes, para los que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieron derecho a vacaciones.

Cuando un trabajador no pudiera hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados, por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los 10 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que laboren en periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo”.

Del precepto transcrito se desprende, que si la relación de trabajo se encuentra vigente y las vacaciones no fueron disfrutadas, se prohíbe entonces su pago, pero en el caso de que el nexo de trabajo se hubiera roto sea cual fuera la causa, evidentemente el trabajador no tendría ya la posibilidad de poder disfrutarlas, por ello, únicamente en este supuesto se tiene derecho al pago proporcional al tiempo laborado.



SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARIA

En cuanto a la prima vacacional, ésta es una prestación accesoria de la principal que son las vacaciones, por esta razón si no se hace uso de ellas, tampoco se tendrá derecho a recibir el pago de la misma en términos del párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que la establece en un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante los periodos que hayan disfrutado.

Así, es menester que el trabajador disfrute de las vacaciones para obtener la prima adicional a que se refiere dicho artículo, sin embargo, en el caso en que la relación de trabajo deja de existir,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONFLICTO DE TRABAJO 5/2002-C.

FORMA A-53

36
evidentemente que al no ser materialmente posible que el empleado disfrute de los periodos de vacaciones a que tiene derecho, tampoco podrá gozar de la prima vacacional que le corresponde en el porcentaje indicado, por ello, en este caso, sí le asiste derecho a la actora para obtener el pago proporcional de dicha prima vacacional, tomando en consideración que la actora ya no continuará laborando para la demandada.

Conforme a lo anterior, debe condenarse a la demandada al pago proporcional del concepto relativo a las vacaciones reclamadas por la actora, así como a la prima vacacional correspondiente, en términos de los artículos 30 y 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Es aplicable a la conclusión anterior, el criterio jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR LOS. CASO EN QUE ES PROCEDENTE EL PAGO DE.- De la interpretación del segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte que sólo establece la prohibición de pagar en numerario los periodos de vacaciones no disfrutados cuando se encuentre vigente la relación laboral; por lo tanto, dicha hipótesis no es aplicable para aquellos casos en que dicha relación cesó porque existe imposibilidad material de que se disfruten. Así por tratarse de una prestación devengada antes de concluir la relación laboral, deben pagarse las

vacaciones no disfrutadas. (Número 672, Instancia: Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 546, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia Laboral)”

Es corolario de lo expuesto en esta resolución, determinar que la acción principal intentada por la actora resulta infundada, por lo que debe absolverse a la demandada tanto de la reinstalación exigida por la actora, como del pago de los salarios caídos por ser una prestación accesoria a la principal; igualmente se impone decretar la absolución relativa al pago de tiempo extraordinario, de la devolución del fondo de pensiones, así como de las prestaciones económicas precisadas en el inciso g) de la demanda; y, en cambio, debe condenarse a la demandada al pago del fondo de ahorro capitalizable, así como de la parte proporcional que tanto de aguinaldo como de vacaciones y prima vacacional le corresponden a la actora por el año de dos mil dos.



SUPREMA
CORTA DE
JUSTICIA DE
LA NACION
SECRETARIA GENERAL

Ante tales condenas pecuniarias, en términos de lo previsto en el artículo 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para su debido cumplimiento, la titular de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá elaborar una propuesta de pago en la que se cuantifiquen las prestaciones a cuyo pago se condenó a la Directora General demandada, la que debe remitirse a la Comisión Substanciadora en un plazo de diez días hábiles contado a partir de que se le notifique esta resolución, con el objeto de que ésta dé vista a la actora para que en el plazo de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y, con base en lo anterior, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia determine lo conducente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Por lo expuesto, y además con apoyo en lo previsto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. La actora [REDACTED],

acreditó parcialmente sus pretensiones y la demandada DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, probó en parte sus defensas y excepciones.

SEGUNDO. Se absuelve a la demandada DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de las prestaciones consistentes en la reinstalación, pago de salarios caídos, pago proporcional de las diversas prestaciones económicas exigidas por la actora en el inciso g) de su escrito de demanda; del pago de tiempo extraordinario, así como de la devolución del fondo de pensiones, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero, cuarto, sexto y séptimo de esta determinación.

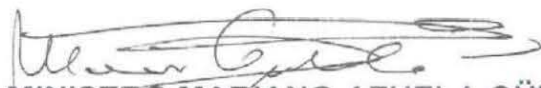
TERCERO. Se condena a la demandada DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, a la devolución del fondo de ahorro capitalizable en términos del considerando quinto, así como al pago del importe del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional en forma proporcional por el tiempo laborado durante el año dos mil dos, conforme a lo precisado en los considerandos quinto y octavo de esta resolución.

CUARTO. Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas y para que proceda oportunamente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando Octavo; y, en su oportunidad, lo archive como asunto concluido.

Lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Mariano Azuela Güitrón.

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



MINISTRO MARIANO AZUELA GÜITRÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ,
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A : Que
esta copia constante de treinta y siete fojas útiles concuerda
fiel y exactamente con su original que obra en el expediente
relativo al Conflicto de Trabajo Núm. 5/2002-C promovido por
[REDACTED] en contra de la Directora
General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; se certifica para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el punto Cuarto resolutivo de la
ejecutoria dictada el diecinueve de octubre del año en curso,
en el citado conflicto de trabajo. México, Distrito Federal,
cinco de noviembre de dos mil cuatro.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Esta hoja corresponde a la certificación de la resolución
dictada por el Tribunal Pleno el diecinueve de octubre de dos
mil cuatro en el Conflicto de Trabajo Número 5/2002-C,
promovido por Juana María Apolinario Lucas .

